

EL CONCEPTO DE ESTADO LAICO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO GUATEMALTECO

Danilo Carías del Cid

Resumen. *Este artículo plantea una respuesta a cuestionamientos sobre la configuración del concepto de Estado laico en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Partiendo de la inexistencia de una disposición constitucional que integre el modelo de Estado según su relación con las confesiones religiosas, se realiza un análisis de los elementos del concepto en la Constitución Política de la República de Guatemala, su desarrollo en la jurisprudencia constitucional y se aporta un breve examen del escenario sociojurídico guatemalteco a la luz del concepto de sana laicidad, siguiendo a Rhonheimer (2009).*

El 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia. Con ocasión de este día, que además, este año coincide con la conmemoración del septuagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, surge en el plano social y académico la discusión sobre el concepto de *Estado laico*. Por una parte, desde la perspectiva de una reivindicación de su gran valor para las sociedades occidentales y, por otra, como señal de alerta ante dos fenómenos, que generan preocupación en diferentes grupos sociales, estos, siguiendo la conceptualización de Ollero (2009), son la posible perpetuación de una confesionalidad sociológica y la denuncia de un laicismo de Estado, fenómenos presentes en la mayoría de sociedades occidentales, entre las cuales, la guatemalteca, no es la excepción.



Ante esta realidad, el presente trabajo académico se plantea dar una respuesta coherente y fundamentada a cuestionamientos sobre la configuración del concepto de Estado laico en la Constitución Política de la República de Guatemala, su desarrollo en la jurisprudencia constitucional, además, de realizar un sucinto análisis del escenario social guatemalteco a la luz de los conceptos vertidos del análisis de derecho constitucional y el concepto de *sana laicidad*, siguiendo a Rhonheimer (2009). El trabajo pretende a la luz de lo establecido constitucionalmente y de lo planteado en el *derecho vivo* de las sentencias, aterrizar en la realidad social, para identificar y traducir conceptos de valor sobre el tema de la laicidad que sean acordes con la protección de la persona y la familia, y con la búsqueda de la consecución del bien común, fines supremos del ordenamiento constitucional guatemalteco.

1. El concepto de *Estado laico* en la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG)

Hace algún tiempo, el abogado guatemalteco Carlos Ovalle Leránz, planteaba en un artículo publicado en Plaza Pública la idea de que *Guatemala no es un Estado laico* (Ovalle 2016); para fundamentar tal planteamiento, el referido autor señala que la CPRG no indica expresamente en su texto que nuestro país sea un Estado laico, cuestión por demás cierta; además, argumentaba que en el texto constitucional se nomina al derecho fundamental como *libertad de religión* y no *libertad de conciencia*, y finaliza su argumentación de índole jurídica, señalando que el preámbulo de la CPRG inicia *invocando el nombre de Dios*. A partir de estos tres puntos y de otros ejemplos prácticos que no atienen a este escrito (por ser de índole ~~~política, coyunturales), concluye con la siguiente tesis, afirmando: «*que a lo largo de la vida republicana nunca se han establecido plenamente el concepto del Estado laico y sus efectos*».

A partir de la tesis en sentido negativo construida por Ovalle, se buscará desentrañar un concepto de *Estado laico* en doctrina, desmenuzado en elementos de general aceptación, y a partir de este, revisar el texto de la Constitución vigente y los matices en la jurisprudencia constitucional, para determinar si existe o no este concepto en el plano jurídico-constitucional en Guatemala;

y si existe, determinar cuál es, con sus limitaciones y alcances, para aterrizarlo en el plano social.

Sobre el concepto de *Estado laico* existen reflexiones conceptuales con vastedad, algunas con perspectiva histórica, otras desde el punto de vista sociológico, pero dada la naturaleza de este escrito, el análisis se enfocará en este concepto en el plano del derecho constitucional.

Al respecto, existe una diferenciación simple sobre el concepto de Estado laico, que plantean varios autores (Revilla, 2017; Adame, 2012), es la que plantea la laicidad como antítesis de la confesionalidad –que en términos inversos se expresa positivamente como la vigencia del principio de neutralidad religiosa del Estado expresamente establecida en la Constitución. A este escueto planteamiento sobre la laicidad, otros autores, agregan componentes de suma importancia, el primero de ellos, se refiere a que no basta con que constitucionalmente un Estado no sea confesional, sino se reconoce el derecho a la libertad de religión o conciencia expresamente como derecho fundamental (sobre este punto particular, amplía el profesor Adame, 2012, tratando el caso mexicano, sobre la necesidad de reformas legales que encaminen a aquel ordenamiento jurídico a un reconocimiento pleno de la libertad religiosa), susceptible de defensa mediante las garantías constitucionales modernas, es decir, un sistema de protección jurídica a la libertad religiosa, cualquiera que este sea, en términos generales o la posibilidad de hacer uso de herramientas como el amparo y la inconstitucionalidad, en términos de modernas garantías constitucionales. Aunque discutible todavía, si se plantea la idea de que un sistema de protección de derechos consagrados en la Constitución en sede judicial sería inoperante, si ese texto constitucional no establece una estructura clara de división de poderes, separación de funciones, pesos y contrapesos, propios del régimen republicano que permiten el goce efectivo a los ciudadanos de los más elementales derechos y libertades.

Otro elemento es el reconocimiento constitucional de la *igualdad entre religiones*, un principio arraigado en la tradición constitucional estadounidense (Nussbaum, 1947), y que también por virtud de su Tribunal Constitucional, se arraigó en España en la época contemporánea, por su planteamiento como principio, es expresado por Satorras (2005) en la siguiente forma:

supone que todo ciudadano (sujeto individual de libertad religiosa) tiene derecho a ejercer su libertad religiosa con un trato igual ante la ley; y que las comunidades religiosas (sujetos colectivos de libertad religiosa) tienen derecho a ejercer su libertad de forma igual entre sí, sin que se las catalogue o se las trate de diferente manera en igualdad de circunstancias (p. 5).

Y existe un último elemento con un matiz de importancia fundamental, es el referente a que un ordenamiento jurídico en la rama constitucional reconozca la religión como una dimensión *importante* de la vida social, este es el componente que marca la diferencia en el plano jurídico, respecto de la actitud del Estado hacia las Iglesias y la religión en general.

Del análisis precedente se pueden extraer cuatro principios rectores de todo Estado laico en el plano constitucional. 1) No confesionalidad del Estado y, por ende, vigencia del principio de neutralidad. 2) Reconocimiento expreso de libertad religiosa como derecho individual/fundamental y la existencia sistema jurídico para su protección. 3) El principio de *igualdad religiosa*. 4) El reconocimiento de la religión como una dimensión importante de la vida en sociedad. De estos cuatro, el último planteamiento es el más discutible como elemento *sine qua non* para la configuración jurídica constitucional del *Estado laico*, considerado, en sentido doctrinario. En el último apartado de este trabajo se dedicará un espacio para tratar su importancia en un plano general, y luego, en el plano particular guatemalteco, en el cual veremos si es un elemento tomado en cuenta en la configuración jurídica del concepto.

2. Estado laico, algunos elementos en la Constitución guatemalteca

A partir de los elementos identificados previamente como compositivos del concepto de *Estado laico*, en este apartado se analizará la presencia de algunos de estos en el texto de la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985. Para tales efectos, se presenta este análisis en tres apartados: el primero, atinente a la cláusula de libertad religiosa y su accesoria, en la que se trata el asunto de la personalidad jurídica de las iglesias (arts. 36 y 37 de la CPRG); el segundo, sobre el contenido del preámbulo constitucional y un tercer apartado para tratar elementos relacionados

a la separación institucional Iglesia-Estado dispersos en el texto constitucional:

a. La cláusula de libertad religiosa y su disposición accesorio

En la CPRG, la libertad de religión se consagra en el artículo 36, norma que expresamente reconoce *el derecho de practicar alguna religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y los fieles de otros credos*. Tal como se afirmaba previamente, esta disposición normativa es la fuente nuclear de la laicidad del Estado; en primera instancia, porque se atraviesa el filtro de evaluación de la confesionalidad, de su lectura se abstrae claramente que el Estado de Guatemala no es confesional y predomina el principio de neutralidad; y en segundo lugar, porque establece la libertad religiosa en la parte dogmática constitucional referente a derechos fundamentales –y por supuesto, dentro del marco de protección mediante las garantías constitucionales, máxime que en Guatemala para el caso del amparo, no existe materia en la que no se pueda invocar la tutela judicial protectora mediante esta herramienta legal (Art. 265, CPRG). La referida norma, se complementa con la contenida en el artículo 37 de la CPRG, que trata sobre la personalidad jurídica de las iglesias, que *reconoce expresamente la personalidad jurídica de la Iglesia católica* –cuestión siempre cuestionada, por esta mención expresa que algunos interpretan se realiza en detrimento de otras iglesias, pero que razonablemente encuentra su explicación en motivos históricos, por la preponderante posición del catolicismo en otro tiempo y su relevancia en la época contemporánea- *y de las otras iglesias, cultos, entidades y asociaciones de carácter religioso, que podrán obtener el reconocimiento de su personalidad jurídica conforme a las reglas de su institución, sin más límite que el orden público*.

En esta misma disposición accesorio se trata la situación patrimonial de la Iglesia católica respecto de los bienes poseídos en forma histórica, y se establece una exención de impuestos para los bienes destinados al culto, a la educación o la asistencia social. Esta última parte, encuentra su razón de ser; primero, en la directa vinculación que existe entre un régimen estable de propiedad privada y el ejercicio de la libertad religiosa; y segundo, se infiere que los constituyentes valoran positivamente el hecho religioso, que en alguna forma le consideran socialmente benéfico –por las labores de educación, salud y de asistencia

social en general que llevan a cabo instituciones religiosas- y establece una disposición fiscal especial para sus propiedades.

b. La laicidad en el preámbulo constitucional

La CPRG, como otras constituciones modernas (véanse la Constitución Federal Suiza o la Constitución de Irlanda), contiene una mención expresa a Dios, al *Creador*, al *Ser Supremo*; y en el caso de Guatemala, al inicio de la Carta Magna, los constituyentes del 85 decidieron iniciar con la aclamación *Invocando el nombre de Dios*, -una de los fundamentos de *Ovalle (2016)* para aseverar que Guatemala no es un estado laico- antes de iniciar con la configuración de nuestro ordenamiento jurídico y previo al pronunciamiento de un preámbulo que según la Corte de Constitucionalidad constituye fuente de interpretación ante dudas serias sobre el alcance de un precepto constitucional (al respecto véase la resolución dentro de expediente 12-86, CC). Sobre la efectiva interpretación de este precepto, su visión en perspectiva comparativa y alcance en el plano de la laicidad se tratará con amplitud en el siguiente apartado dedicado al análisis del Estado laico en la jurisprudencia constitucional.

c. Elementos sobre la separación Iglesia-Estado en el texto constitucional

Sobre este objeto, existen varios elementos dentro del texto constitucional que se pueden considerar como *concesiones* o *limitaciones* sobre personas relacionadas con el culto y las cuestiones civiles. Entre estas, podemos mencionar, la disposición del artículo 49 constitucional respecto de la posibilidad de que ministros de culto facultados por la autoridad administrativa correspondiente puedan celebrar matrimonios civiles -una evidente concesión-; o la prohibición para que los ministros de cualquier religión o culto puedan optar a los cargos de presidente y vicepresidente de la República, ministros de Estado; o magistrados-jueces, contenida en los artículos 186, 197 y 207 de la CPRG -una clara limitación-. De la lectura y análisis de estas últimas disposiciones, se pueden obtener algunas conclusiones, en el primer caso, por un razonable argumento de facilitación práctica para la celebración del matrimonio -y que encuentra su explicación en la relevancia cristiana y canónica de la institución matrimonial- el texto constitucional prevé la posibilidad de que los ministros de culto puedan celebrar matrimonios civiles; y por otra parte, quizá no como contrapartida, pero sí en sentido opuesto, el texto constitucional establece claras prohibiciones de que ministros de culto -dada su posición dentro de sus iglesias, y respecto de la sociedad- puedan acceder a altos cargos

políticos en el poder ejecutivo, ya sea por la vía electoral o del nombramiento en los casos que corresponda; esto último se interpreta como una disposición de salvaguarda de la separación Iglesia-Estado, en una lógica de doble vía, imposibilitando que determinados ciudadanos tomen ventaja de su posición para la obtención y el ejercicio de determinados cargos y a la vez, protegiendo a la Iglesia como cuerpo intermedio de la sociedad, de eventuales daños por politización.

Del análisis precedente se desprende lo siguiente: primero, que no existe una configuración normativa integrada del concepto de **Estado laico** en la Constitución Política de la República, no existe mención expresa del adjetivo, ni tratamiento especial de ninguna naturaleza; y segundo, que sí existen elementos de mucha relevancia para la configuración del concepto de **Estado laico** dispersos en la Constitución, desde la fundamental cláusula de libertad religiosa, pasando por el contenido del preámbulo constitucional y tomando en cuenta como corolarios las demás disposiciones relativas a la relación Iglesia-Estado contenidas en el resto del texto constitucional. Es a partir de estos elementos que ha correspondido a la Corte de Constitucionalidad, como órgano garante de la defensa del orden constitucional (Art. 268, CPRG) y su máximo intérprete configurar el concepto por la vía jurisprudencial, el cual será objeto de estudio y análisis en el apartado siguiente.

3. El concepto de *Estado laico* en la jurisprudencia constitucional guatemalteca

Como se remarcaba en un apartado precedente, la Constitución Política de la República de Guatemala no contiene alusión expresa a la *laicidad*, ni usa el adjetivo *laico*, en ninguna parte del texto fundamental. Es por esta razón que la noción de *Estado laico en el plano constitucional*, integrando la cláusula que consagra la libertad religiosa, con el preámbulo y algunos primeros artículos constitucionales en los que se enuncia una serie de valores que deben inspirar la estructuración y funcionalidad del ordenamiento jurídico guatemalteco.

Es a partir de estas ideas que la Corte de Constitucionalidad, conociendo casos concretos de amparo e inconstitucionalidad, ha interpretado, construido y clarificado el concepto de *Estado laico* y lo ha introducido vía jurisprudencial como fuente de nuestro

ordenamiento. Sobre el tema, la Corte se ha pronunciado en tres decisiones judiciales, dos en materia de inconstitucionalidad y una en amparo.

La aparición del concepto de Estado laico en la jurisprudencia constitucional y la confirmación del precedente

Entre el año 2006 y 2007, varias personas individuales y jurídicas se dieron a la tarea de impugnar la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y su Integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva que aprobó el Congreso de la República mediante Decreto 87-2005. En el marco de esas acciones, los postulantes alegaban que la referida normativa adolecía de vicios de inconstitucionalidad, pues conculcaba el derecho a la libertad religiosa (artículo 36) y violentaba el régimen de protección a la familia que establece la Carta Magna en su artículo 47 (además, señalaron violentados otros derechos y principios, pero los mencionados son los atinentes a la posterior consideración del Tribunal Constitucional, en la que se pronuncia sobre el tema sobre el cual versa este artículo).

En el marco de la resolución de esta acción constitucional, la Corte emitió un pronunciamiento (sentencia de inconstitucionalidad correspondiente a los expedientes acumulados 1002-2006, 1288-2006 y 1451-2007) en el que abordó cuestiones relacionadas a la laicidad del Estado, entre estas, cabe destacar las siguientes:

***El Estado de Guatemala, conforme la Constitución actual, es laico.** Así se advierte en el preámbulo de la Constitución en el que la Asamblea Nacional Constituyente reconoce la existencia de un Ser Supremo, sin hacer especificaciones o enumeraciones sobre los modos en que cada cual lo conciba o venere; simplemente hace evidente dicho reconocimiento al iniciar el texto del preámbulo invocando el nombre de Dios. Al hacer reconocimiento expreso de este derecho, se pronuncia en pro del respeto a la diversidad de cultos.*

El párrafo precitado contiene la materia toral, la corteza del tratamiento del concepto de *Estado laico* en nuestra jurisprudencia constitucional. En el contexto de un breve tratamiento sobre la objeción de conciencia, la Corte de Constitucionalidad afirma en forma expresa que **el Estado de Guatemala, conforme la Constitución actual, es laico**, cuestión que, como tratamos en apartados, no se desprende de la lectura llana del texto constitucional.

Lo más curioso es la forma, el razonamiento empleado por el alto tribunal, para sustentar tal afirmación; la Corte señala que tal afirmación se sustenta primordialmente en la lectura e interpretación del preámbulo constitucional, el cual los constituyentes decidieron iniciar invocando el nombre de Dios, a partir de esto, la Corte afirma que, si bien el texto constitucional reconoce la existencia de un Ser Supremo, no realiza acotación alguna sobre el modo de practicar la religión –en consonancia por el contenido de la cláusula de libertad religiosa consagrada con posterioridad- y que por lo tanto, al hacer reconocimiento expreso de este derecho –del derecho de conciencia, religión o culto, indistintamente- se pronuncia en pro del respeto a la diversidad de cultos.

Así las cosas, corresponde analizar ahora la categorización del concepto de *Estado laico*, desarrollado en sustancia en esta sentencia –y que no variará mucho, derivado del escaso desarrollo del concepto en la jurisprudencia constitucional-.

Primero, respecto de la fundamentación de la CC en el texto del preámbulo, es preciso señalar que la mención expresa de Dios o de Ser Supremo en las constitucionales modernas ha sido ampliamente señalada por considerarse como una afrenta a algunas concepciones de *Estado laico*. En este sentido, es oportuno traer a colación la forma en que inicia la Constitución Política de los Estados Unidos con *We the People* o *Nosotros el pueblo* sin hacer mención a alguna entidad divina –aunque la Declaración de Independencia, documento vital importancia en la fundación de la nación norteamericana, sí la contiene- pues autores (Minna, 2016) entienden que, para asentar una tradición legal de respeto a la libertad religiosa, de neutralidad y de plena igualdad entre religiones, no se podría aludir a la existencia de la divinidad en forma expresa, pues esto afectaría aquellos ciudadanos que, bajo la nominación del ateísmo o agnosticismo, negaran la existencia de Dios.

Segundo, la Corte de Constitucionalidad interpreta nuestro preámbulo en contra de las consideraciones doctrinarias e históricas que se han realizado sobre estos contenidos, es decir, que no considera que la alusión al Ser Supremo en el preámbulo vaya contra un régimen de *Estado laico*, contra la neutralidad religiosa; sino que, por el contrario, *encuentra en este texto sustento hermenéutico para afirmar que el Estado de Guatemala es laico* al considerar que, si el preámbulo omite la mención de determinada forma de vida religiosa, la Constitución entonces se pronuncia en

pro de la libertad de cultos –pero siempre, bajo la premisa de la existencia de un Ser Supremo, de una entidad divina, de Dios-.

Tercero, llevando esta consideración jurisprudencial al contraste con el plano doctrinario, podemos aseverar según la Corte de Constitucionalidad, si bien Guatemala es *un Estado laico*, encajaría en lo que Arbós, Ferrer y Pérez llaman un *Estado laico débil*:

Finalmente, el Estado laico débil no toma partido por ninguna religión en concreto, y en ese sentido mantiene la vigencia del principio de neutralidad. Pero lo hace de un modo especialmente debilitado: valora positivamente el hecho religioso, que es considerado un valor social benéfico; por ello, el Estado puede ser neutral (en mayor o menor medida) entre las distintas religiones, pero no lo es entre éstas [sic] y las creencias de los ateos o agnósticos. No se descarta en este modelo el establecimiento de algún tipo de cooperación entre las instituciones del Estado y las iglesias (o con alguna/s en particular) y los argumentos religiosos quedan legitimados para su presentación en la esfera pública. (La laicidad desde el Derecho, p. 23)

Al señalar esta clasificación, en ningún momento pretendo establecer una consonancia perfecta entre la consideración de la CC y el concepto forjado por los juristas españoles que se vierte en el párrafo precedente. Pero sí, señalar que a la luz de esto, y en especial de la estructura del razonamiento para sustentar la afirmación de la laicidad del Estado, se puede advertir que esta concepción es la que mejor caracteriza el planteamiento.

Primero, porque al afirmar el pleno respeto a la diversidad de cultos como elemento sustancial en la concepción jurisprudencial del *Estado laico* se mantiene la plena vigencia práctica del principio de neutralidad, al no tomar partido por ninguna religión en concreto. Segundo, porque es notorio que tanto la CPRG como la CC en su decisión judicial –hecho que luego se ve reflejado en buena parte del ordenamiento jurídico guatemalteco que dispone una serie de beneficios y prerrogativas para las entidades religiosas (sobre esto, véase la exención impositiva en art. 37, como ejemplo) valoran positivamente el hecho religioso, sin esbozar consideración precisa, pero probablemente por considerarlo un *valor social benéfico*. Tercero, porque derivado de la reivindicación, uso hermenéutico y sustento para afirmación jurisprudencial del contenido inicial del preámbulo constitucional, se deduce que se concibe un Estado

laico nutrido por la idea de igualdad de religiones, pero con una consideración diferente ante el ateísmo y el agnosticismo.

Y respecto de las últimas consideraciones de la clasificación, en Guatemala, en términos prácticos, el Estado y las Iglesias han mantenido relaciones de colaboración institucional en distintos campos sociales durante toda la vigencia de la Constitución de 1985, además de que los argumentos religiosos en la esfera pública han estado legitimados para su presentación en distintos foros políticos y sociales derivado de un régimen constitucional de pleno respeto a la libertad de expresión y de religión, y del derecho común que tiene todo ciudadano –creyente o no creyente– de incidir en la vida política nacional.

Las consideraciones realizadas por la Corte de Constitucionalidad al resolver los expedientes acumulados citados en este apartado, son de nuevo reafirmadas por un nuevo precedente judicial contenido en la decisión judicial dentro del expediente 3004-2007, en el que también se instaba la declaración de vicios de inconstitucionalidad de la misma normativa.

4. Otra pincelada para el concepto de Estado laico, pronunciamiento sobre la libertad de la Iglesia

Ahora, para terminar de analizar el esbozo sobre el concepto de Estado laico en la jurisprudencia constitucional, es preciso analizar el contenido de la resolución correspondiente a los expedientes acumulados 103 y 107, 2011 de la CC.

Esta versa sobre una situación completamente diferente a la analizada previamente, la consideración que será objeto de estudio se realiza en el marco de la resolución de un proceso de amparo, que en apelación conoció el máximo Tribunal Constitucional, sobre alegatos de violación de derechos fundamentales en la expulsión de varios ciudadanos de la Hermandad del Señor Sepultado del Templo de Santo Domingo. En esta resolución, la Corte dedica un apartado a analizar su propia competencia en la materia, tomando en cuenta que la Iglesia católica tiene un propio régimen jurídico eclesiástico que podría ser aplicable al caso concreto. A partir de esta introducción, veamos lo que afirma el Tribunal, en especial, en lo relativo a la libertad práctica de las Iglesias como componente del *Estado laico*:

Primero, inicia la Corte el apartado relevante reflexionando sobre la importancia de considerar sobre la relación entre el ámbito de aplicación del derecho canónico y el de la jurisdicción constitucional para la resolución de casos como este, para ello, analiza una serie de documentos eclesiásticos sobre la doctrina que desde dentro de la Iglesia católica se ha construido para clarificar las relaciones entre los ordenamientos jurídicos, tanto el religioso como el civil. Entre los documentos analizados se encuentra el texto *El Ordenamiento Canónico* del profesor Javier Hervada, la Constitución de la Iglesia *Lumen Gentium*, el *Derecho de la Iglesia* de Javier Cenalmor, la Constitución Apostólica *Sacrae Disciplinae Leges*, y la Declaración Conciliar *Dignitates Humanae* sobre la libertad religiosa.

Segundo, la Corte afirmó que, *por la especial naturaleza de este fallo, las citas de documentos eclesiásticos que anteceden no han tenido otro objeto que el de describir, a grandes rasgos, la posición que mantiene la Iglesia católica respecto de la autoridad y competencia que reclama para conocer y decidir, con exclusión de las autoridades políticas y civiles, en aquellos asuntos que atañen a cuestiones que se suscitan a lo interno de su institución. Con todo, interesa determinar la perspectiva que, desde el ordenamiento constitucional del Estado de Guatemala, se vislumbra con relación a la aludida autonomía eclesiástica (sentencia aludida, p. 11).*

Y a partir de la aclaración precedente, el Tribunal construye el siguiente argumento:

En primera instancia, la Corte señala la importancia del contenido de los artículos 36 y 37 constitucionales respecto del establecimiento del régimen de libertad religiosa, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las Iglesias, haciendo énfasis en el tratamiento especial de nuestra Constitución hacia a la Iglesia católica, tanto por su mención expresa, como por el apartado dedicado a tratar su régimen patrimonial.

Luego procede a pronunciar el parágrafo fundamental que atañe a nuestro análisis:

Es así como el artículo 37 constitucional, en coherencia con el carácter laico del Estado, afirma y garantiza la libertad de la iglesia, en cuanto comunidad que persigue un fin espiritual (sin importar la fe específica que defienda), libertad que conlleva no sólo [sic] la facultad de ejercer la enseñanza y culto religiosos —al respecto,

véase el artículo 73, CPRG)—, **sino que se dirige a reconocer, para la concreta organización religiosa de que se trate, la potestad de sujetar su acción y funcionamiento a normas compatibles con la doctrina y creencias que proclama.** *Esa libertad, cuyo único límite se circunscribe a razones de orden público, atañe a los distintos aspectos que incumben al ejercicio y práctica de la creencia o religión, entre los que destacan los propios actos de culto, la estructura jerárquica de la organización o las relaciones de ésta con sus creyentes y fieles.* (sentencia aludida, p. 11, la negrita y las cursivas son propias)

En la consideración precedente, encontramos que, según la Corte, el artículo 37 de nuestra constitución en plena coherencia con la *laicidad* del Estado, afirma y garantiza la libertad de la Iglesia como institución, libertad que se limita a razones de orden público, y que se entiende, como una libertad que se extiende en todos los ámbitos de actuación en un nuestro régimen de Estado constitucional de derecho (al respecto, véase el artículo 73 constitucional sobre libertad de enseñanza religiosa y posibilidad de sostenimiento financiero estatal de la misma).

Del análisis de lo vertido por la Corte de Constitucionalidad, podemos afirmar que este nuevo esbozo sobre el concepto de *Estado laico* se encuentra en consonancia con la clasificación del *Estado laico débil* que se trató en apartados anteriores, puesto que reconoce un amplio margen de libertad, participación e incidencia de la Iglesia católica —y por analogía y extensión, de las demás organizaciones religiosas— como institución dentro de la vida social, de todo el ámbito público, cuestión que también estaría presente en esta caracterización.

Después del análisis de los elementos contenidos en estas decisiones judiciales —aunque desarrollados en forma escueta, en casos diferentes, pero que fundamentalmente versan sobre la laicidad del Estado— se pueden realizar dos afirmaciones: primero, que la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala en su jurisprudencia ha establecido que Guatemala es un Estado laico; y luego, que la concepción de Estado laico, presente en nuestra Constitución y afirmada jurisprudencialmente corresponde a la concepción que en doctrina se conoce como la del *Estado laico débil*, que puede no gustar, no parecer, cuestionarse, pero que, en términos prácticos, es la reflejada en nuestra Constitución, la interpretada por el órgano al que se le encomendó la defensa del orden constitucional, y la que inspira y seguirá inspirando por

razones obvias la configuración y aplicación del ordenamiento jurídico guatemalteco.

5. La perspectiva Rhonheimer del plano legal al social, del Estado laico débil a la sana laicidad en Guatemala

En el apartado final de este artículo, a partir del diagnóstico sobre el concepto de Estado laico esbozado a la luz del derecho constitucional, se pretende analizar el escenario social guatemalteco en torno a la discusión sobre el tema de laicidad y rescatar algún concepto valioso para su aplicación práctica.

Según el informe Religión en América Latina (Pew Research, 2014), Guatemala es un país en donde el 91 % de la población se denomina cristiana, es una sociedad calificada como una de las más conservadoras de América Latina. En este país, la tensión sobre el tema de la laicidad es particularmente intensa, yendo desde los grupos sociales que pugnan por el laicismo de Estado y entre quienes desde lo religioso pretenden cercenar algunas libertades.

En los apartados iniciales de este texto se abordó el tratamiento de libertad de conciencia y el Estado laico, en la constitución vigente y la jurisprudencia constitucional; a partir de ese desarrollo, ahora nos atiene analizar sobre cómo desde esa construcción constitucional y jurisprudencial, corresponde tratar dos posiciones antagónicas, ambas igual de nocivas para la libertad individual.

6. El *laicismo de Estado*, incompatible con el régimen constitucional y alejado de la realidad social *versus* la ofensiva religiosa de corte iliberal

En la sociedad guatemalteca, existen asociaciones y grupos sociales que promueven la idea del *laicismo de Estado*, correspondiente un modelo de configuración constitucional de *laicidad fuerte* en el que se propugna la religión y las creencias religiosas no deben ocupar ningún espacio en la esfera pública (Arbós, Xavier y Ferrán, 2010); con sustrato filosófico e ideológico en lo que Rhonheimer (2009) denomina *malsana laicidad* o *integrismo laicista*, que según el referido autor se refiere a:

Una laicidad que, además de reivindicar la autonomía jurídica e institucional con que se ejerce el poder político, limitase la presencia pública de la voz de la Iglesia y su influjo cultural, y dificultase e incluso no facilitase –según normas imparciales de justicia- la libertad religiosa y su anejo ejercicio de la religión, sería expresión de un Estado laicista en sentido malsano, integrista: convertiría la laicidad en un credo fundamentalista a-religioso, en lugar de respetarlo como una dimensión esencial de la vida –también en su dimensión social y pública-, lo neutralizaría con la fuerza coercitiva del Estado.

Como se puede observar, esta visión del mundo que se nutre de la *malsana laicidad* es incompatible con la realidad en Guatemala; y es incompatible en dos planos de fundamental importancia; primero, a todas luces en plano del derecho constitucional, en donde a partir del esbozo conceptual del *Estado laico* y del análisis del texto constitucional y su desarrollo jurisprudencial, se establece que la visión del fundamentalismo arreligioso no tiene cabida dentro de la configuración constitucional la laicidad en Guatemala; y segundo, porque se ignora el plano social, no solo por la cantidad de ciudadanos que se denominan religiosos, sino porque el raigambre religioso –cristiano- tiene un arraigo fuerte innegable.

Así las cosas, además de advertir la incompatibilidad legal y social del *integrismo laicista*, también es justo señalar que la vigilancia y protección de un régimen liberal de Estado laico que protege a la libertad religiosa como el guatemalteco, corresponde en todas las vías. Del otro lado del espectro social, también existen grupos que, mediante argumentos religiosos, pretenden cercenar valiosas libertades civiles que también están protegidas por nuestro régimen constitucional, y llevar al país al plano de la religión oficial y la imposición, cuestión que está también por demás alejada de la noción fundamental de un régimen respetuoso de la libertad religiosa.

7. La *sana laicidad* como antídoto

Ante las vertientes señaladas en el párrafo anterior, es preciso rescatar el concepto de sana laicidad, que resulta valioso dada la configuración del concepto de estado laico en el plano constitucional y la realidad social guatemalteca. Sobre este, refiere Rhonheimer:

La libertad religiosa y la correspondiente neutralidad del Estado son compatibles con la asunción de medidas para facilitar la práctica religiosa a los diversos

creyentes, de acuerdo con su propia auto comprensión. Así lo muestra la práctica en tantísimas naciones, pero también el texto de muchísimas Constituciones de países europeos —y como vimos anteriormente, también la Constitución Política de la República de Guatemala— *la cuales, respetando plenamente la laicidad del Estado y la libertad religiosa de los ciudadanos, no rebajan la religión a nivel de un hecho meramente privado. Con todo, en la lógica de la laicidad del Estado y en el seno de una sociedad política constitucionalmente pluralista, cualquier reconocimiento de prácticas religiosas no se formula en virtud de un juicio sobre la verdad de una determinada religión, sino conforme a criterios de justicia política.* (Rhonheimer, 2009, p. 111)

Como vemos, el profesor suizo al referirse a la sana laicidad, concibe una serie de ideas que nutren un régimen de *Estado laico* con base en el principio de neutralidad, de pleno respeto a la laicidad del Estado y a la libertad religiosa —elementos presentes en el ordenamiento constitucional guatemalteco y el desarrollo de concepto de laicidad en la jurisprudencia—, y que en forma importante da fundamento, a la conclusión de que el régimen de Estado laico en Guatemala, desde la perspectiva constitucional, no pretende reducir a la religión a un mero hecho privado, sino que, por el contrario, el análisis apunta a que en nuestro ordenamiento jurídico se considera a la religión como un hecho social benéfico, se reconoce la libertad plena de las iglesias y sus miembros para expresarse y actuar en la vida pública y la plena posibilidad de que el Estado, en el cumplimiento de sus fines, se auxilie y apoye en las instituciones de carácter religioso como lo ha hecho durante toda nuestra historia constitucional.

Referencias

Libros y artículos académicos

- Adame, J. (2012). Estado laico y libertad religiosa. En *Estado laico y los derechos humanos en México 1810-2010* Tomo I (27-44). México: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM.
- Arbós, X., Ferrán, J. y Pérez, J. (2010). *La laicidad desde el Derecho*. España: Marcial Pons.
- Blancarte, R. (2009). *El por qué de un Estado laico*. México: Laicismo.org.
- Carmona, A. (2015). Laicismo y Derecho Constitucional. *Apuntes sobre laicismo*, II, 35-44.

- Nussbaum, M. K. (1947). *Libertad de conciencia, en defensa de la tradición estadounidense de igualdad religiosa*. México: Ed. des.
- Ovalle, C. (2016). *Guatemala no es un estado laico*. Plaza Pública, Edición digital.
- Pew Research Center. (2014). *Religión en América Latina, cambio generalizado en una región tradicionalmente católica*.
- Rhonheimer, M. (2009). *Cristianismo y laicidad, historia y actualidad de una relación compleja*. España: Editorial Rialp.
- Samayoa, O. (2017). *Estado laico de derecho*. Plaza Pública, Edición digital.
- Satorras, R. (2005). *Lecciones de Derecho Eclesiástico del Estado*. España: Universidad de Barcelona.
- Valenzuela, L. (2010). Breve análisis sobre el estado laico y el derecho a la libertad de conciencia y de educación en la jurisprudencia constitucional en Guatemala. *Revista de Estudios de Juventud*, 91, 135-149.

Artículos web

- Minna, A. (2016). Why God is in the declaration but not in the Constitution. 12 de diciembre de 2018, de Journal of the American Revolution. Recuperado de: <https://allthingsliberty.com/2016/02/why-god-is-in-the-declaration-but-not-the-constitution/>
- Reyes, Luis. (2016). ¿Está en peligro el estado laico guatemalteco? 11 de diciembre de 2018, de Fundación Libertad y Desarrollo. Recuperado de: <https://www.fundacionlibertad.com/articulo/esta-en-peligro-el-estado-laico-guatemalteco>.

Textos legales

- Constitución Política de la República de Guatemala
- Constitución Política de los Estados Unidos de América
- Digesto Constitucional de Guatemala, versión digital

Sentencias

- Sentencia de Amparo correspondiente a los expedientes acumulados 103-2011 y 107 -2011 de la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala.

Sentencia de Inconstitucionalidad General correspondiente a los expedientes acumulados 1202-2006, 1288-2006 y 1451-2207 de la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala.

Sentencia de Inconstitucionalidad correspondiente al expediente 3004-2007 de la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala.